

Talca, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.

**VISTO:**

Se reproduce la sentencia en alzada de tres de junio de dos mil veinte, con excepción de los motivos octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto; y la parte decisoria del mismo.

Del mismo modo, se reproduce la sentencia complementaria de diecinueve de octubre último, con excepción de su motivo tercero.

**Y SE TIENE, EN SU LUGAR, EN CONSIDERACION:**

I.- En cuanto a la prescripción de la acción.

1º) Que si bien es cierto, nuestra legislación establece plazos de prescripción en materia civil, no podemos desafectar este proceso en concreto de su naturaleza; y en este sentido, debemos recordar que los hechos están constituidos por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile en contra de la actora.

Determinada la naturaleza de la acción, se debe señalar que la presente demanda fue notificada el 5 de septiembre de 2018, como se lee a folio 10 del proceso, estimando la demandada que la legislación aplicable es la ordinaria civil de aplicación general, deduciendo de ahí, todo el desarrollo que concluye en que la acción no es imprescriptible, teniendo como uno de sus múltiples fundamentos expresados en que el objetivo de la prescripción es la seguridad para la sociedad.

Sin embargo, olvida la demandada que se trata de una materia especial, que ha tenido un trato especial, tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia internacional y nacional, y a la cual está obligado el Estado de Chile en virtud del artículo 5 inciso 2º, en relación a la Convención



Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 2, comprometió al Estado de Chile “... a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

Dicha Convención tiene su órgano jurisdiccional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuyas sentencias el Estado de Chile queda obligado por mandato constitucional y legal; y en ella se condenó al Estado de Chile, en la Causa rol Corte IDH, “Guerra Ordenes y otros contra Chile” de 29 de noviembre de 2018 (párrafos 76, 102 y 117), por haber aplicado la prescripción en materia civil a causas provenientes de violaciones a los derechos humanos, toda vez que con ello se vulnera el derecho a la reparación integral. Por lo tanto, la prescripción en materia de derechos humanos, no opera, ni en el ámbito penal, ni en el ámbito civil, así lo ha decidido unánime y reiteradamente la Corte IDH, y a ella estamos sometidos por mandato de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y obligados a cumplir sus decisiones y obligaciones contraídas, por decisión de la Carta Constitucional que tiene jerarquía por sobre cualquier ley, incluido por cierto, el Código Civil.

2º) Que sin perjuicio de lo ya expresado, ello se justifica, además, con el hecho notorio y conocido de que no hubo posibilidades de hacer efectiva la acción ante los tribunales durante el gobierno militar en estos casos. Si bien la jurisprudencia ha señalado reiteradamente, tal situación, no obstante, se basa en antecedentes de Justicia y Derecho humanitario principalmente, por cuanto no puede racionalmente suponerse que el sólo hecho de la vuelta a la democracia traería consigo el “efecto mágico” de normalizar la historia de un país que vivió bajo una situación de anormalidad constitucional por 17 años; nunca ha existido en la historia de la humanidad



un cambio automático y de efectos inmediatos, desde un régimen autoritario a uno democrático; hay eventos que permiten observar un cambio de actitudes y también de normativas que pretenden devolver la vida cívica constitucional a la normalidad, considerada así según los estándares internacionales, mas, ello no es óbice a que muchas prácticas y defectos burocráticos; temores civiles, militares y gubernamentales; acción de fuerzas de facto; y otros cientos o miles de factores impidan tener un Estado de Derecho Democrático y Constitucional, plenamente eficaz, y mucho menos al día uno de la vuelta a la democracia.

En efecto, bajo la luz del derecho humanitario no es posible, ni admisible, suponer que todos recuperamos la plenitud de la capacidad cívica, jurídica y psicológica para poder demandar al Estado de Chile, las ciencias sociales y humanistas así lo señalan. Por lo anterior, y volviendo al argumento principal, si la propia demandada reconoce la situación excepcional que justifica la imprescriptibilidad de la acción penal, no puede, en materia civil, aplicarla para un período determinado y no aplicarla para otro período; ello es arbitrario, y si no hay ley que haga tal distinción, no le corresponde al Estado hacerla, por lo demás, si así se quisiera, es la misma demandada la que hace las leyes, y no la ha hecho en este sentido.

3º) Que, por otro lado, si consideramos que se está demandando la indemnización de perjuicios por daño moral, ¿Cómo podemos determinar dicho daño respecto de una situación que no sabemos si ocurrió o no, y cómo ocurrió? No resulta racionalmente posible fijar un daño moral sin que previamente se haya determinado la existencia de un delito y sus responsables, en el mejor de los casos ello puede hacerse conjuntamente, pero nunca antes de que esté establecida la responsabilidad penal, exigir lo contrario significa que nunca podría condenarse civilmente ya que no



habría delito, ni pena, ni hechos ni responsables, y lo que es peor, ni siquiera el cuerpo de la víctima.

Además ¿si en materia penal no se establece el hecho dañoso para demandar indemnización de perjuicios, como se iba a exigir establecerlo en materia civil sin afectar lo penal? No hay que olvidar que las desapariciones forzosas, las ejecuciones sumarias y los secuestros calificados fueron negados sistemáticamente por las autoridades de la época, y hasta hoy ello ocurre por muchos de los actores políticos, por lo que sólo la sentencia definitiva que establece la ocurrencia del hecho que por muchos es negado; ella es la que permite establecer el plazo para la reclamación de la indemnización. Un ejemplo claro de ésto es el caso del ex Presidente Eduardo Frei Montalva; su muerte fue declarada oficialmente, en su oportunidad, como consecuencia de una enfermedad; y hoy, desde hace poco se ha vuelto a investigar como magnicidio, el que estuvo oculto hasta hace poco tiempo, apareciendo procesamientos penales por considerar ahora, muchos años después, que su muerte fue ocasionada intencionalmente. No cabe duda alguna que de haber demanda civil, se tendrá derecho también a demandar la indemnización civil, sin embargo, hasta antes de confirmarse la intervención de terceros en su muerte no había delito, ¿era posible demandar civilmente entonces? No, porque a lo imposible nadie está obligado. No puede esperarse que ocurran casos emblemáticos para cambiar de criterios, toda vida, cualquier vida bajo el Derecho Humanitario tiene la misma importancia.

4º) Que también existen razones de Estado que dieron los tribunales en materia de violaciones a los derechos humanos para no investigar, o para sobreseer; el argumento fue la no existencia de dichas violaciones, las que solo se reconocieron a partir de los Informes Rettig y posteriormente Valech respecto de los torturados y presos políticos. Por lo tanto, si para la justicia



y el Estado de Chile no existían dichos delitos hasta esa fecha, ¿Cómo es posible demandar los perjuicios y el daño moral antes de que el propio Estado reconozca tales hechos? No puede la naturaleza patrimonial de la reparación demandada en este proceso, pasar por sobre la naturaleza excepcional que tenga la causa material del daño causado cuando se violan los derechos humanos por un Estado a través de sus agentes; es decir, no se trata del funcionario público que actuando con dolo o negligencia causó daño a un civil, se trata de un funcionario público que, actuando con dolo, y contando con la instigación, ayuda y protección del Estado de Chile, comete crímenes calificados como de lesa humanidad, todo ello en busca de un fin propio del terrorismo de Estado. Por ende, no puede existir analogía de criterios donde no hay similitud de causa, ni donde tampoco hay similitud de naturaleza de la acción ni mucho menos similitud de normas aplicables; en el primer caso el funcionario público se rige por el derecho penal y derecho administrativo; en estos casos, en que la causa de pedir es una violación de derechos humanos, se rige por la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en primer término; y después de ello, por la legislación interna respectiva, en lo que no contradiga dichas normas, sin perjuicio que este mismo razonamiento es el que se encuentra implícito en materia penal.

5º) Que también debe considerarse que el aplicar este criterio excepcional para un caso excepcional, tampoco constituye novedad para el ordenamiento civil chileno, puesto que existen acciones imprescriptibles para temas menos sensibles y muchos más ordinarios que éste; como el artículo 1317 del Código Civil relativo a la partición de bienes; el artículo 195 del Código Civil relativo al ejercicio de la acción de filiación. Por otro lado tenemos la acción de nulidad de derecho público establecida en la Constitución, de manera tal que reconocer esta situación excepcional no es



anormal, no es temeraria, ni mucho menos injusta, al contrario; nuestra Carta Fundamental por la vía del inciso 2° del Artículo 5 nos liga directamente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 63.1 se dispone que cuando se han violado los derechos reconocidos por dicha Convención, que es el caso concreto en autos, se debe, entre otras medidas, pagar una justa indemnización; para lo cual incluso en el Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras” la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que tiene competencia incluso para ver la inaplicabilidad de las normas de derecho interno en cuanto estas constituyan un obstáculo para la protección de sus derechos. Dicha afirmación no la expresa condicionada ni restringida sólo a materia penal, y además la formula dentro del contexto de la justa reparación, que es un tema evidentemente patrimonial.

Razonar en sentido contrario a lo señalado precedentemente, además, resultaría totalmente ajeno a la práctica y costumbre jurídica actual del derecho chileno, cada vez más dependiente y férreo defensor de sus compromisos comerciales y patrimoniales en el ámbito internacional, por lo que, si en el tema comercial y patrimonial tenemos una inexpugnable defensa de los mismos; con mayor razón debe ser así en el tema de las violaciones de derechos humanos; no se puede hacer caso omiso y contrario de lo que exigen los Tratados, Pactos y Convenios internacionales, ya que todos ellos tienen una categoría superior y constitucional cuando se trata de derechos humanos.

Por otro lado, la misma Convención Americana habla del nexo causal entre la violación del derecho con su reparación, de manera tal que si no tenemos antes ese reconocimiento, difícilmente podemos demandar indemnización.



Por último, en este tema, las sentencias condenatorias en materia de violaciones de derechos humanos, sede penal, deben tener un efecto útil, y parte de ese efecto útil incluye la reparación mediante el pago de una justa indemnización, de manera tal que no hay otra forma de cumplir con las normas internacionales en materia de derechos humanos que impone la voluntaria ratificación e incorporación de Chile a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino es permitiendo el ejercicio de la acción civil pertinente cada vez que se ha obtenido una sentencia condenatoria en materia penal, razonar distinto, por muchos criterios doctrinarios que existan, implica, en nuestra realidad, exponer imprudente e injustificadamente a Chile a una nueva sanción internacional.

6º) Que en relación a la seguridad jurídica, ya no cabe duda que la seguridad jurídica como valor del derecho tiene sus excepciones, algo que vemos en este mismo tema, el de las violaciones a los derechos humanos, en sede penal. De esta forma dicho valor no constituye un absoluto, y la generalidad de las excepciones está constituida en relación a la naturaleza de la materia. En este caso, la reparación concreta y directa es un derechos fundamental, y la misma Convención Americana reconoce expresamente (artículo 63) que una parte de la reparación es el derecho a una indemnización justa, y esto es sumamente relevante; no sólo exige una indemnización, sino que además que ella sea justa, por lo que no cabe duda alguna del contenido de la norma; y más aún, si dicha norma no existiera (sabemos que existe), aun así, sería inaplicable la prescripción por aplicación del *ius cogens*, no debiendo olvidarse que siempre, cuando se trate de un tema de derechos fundamentales, aún en sede patrimonial, la interpretación de las normas debe ser conforme al principio *pro homine* o favor persona.

7º) Que alega la demandada que la jurisprudencia interna ha dictado fallos que acogen su teoría, pero omite indicar que también hay fallos que



acogen la teoría de la demandante, por lo que no se trata de una cuestión pacífica, y la opinión jurisprudencial mayoritaria puede cambiar en cualquier momento, sin perjuicio de lo cual, desde hace algunos años, la jurisprudencia ha sido pacífica en acoger la imprescriptibilidad de la acción civil, y tan así es, que de los fallos citados por la demandada, el ultimo tiene fecha 29 de octubre de 2007.

8º) Que, a mayor abundamiento, la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema precisa que, *“tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que insta el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2015; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras. Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el*





*empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.*

*Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado.*

*Sexto: Que en el caso en estudio, dado el contexto en que los hechos se desarrollaron, con la intervención de agentes del Estado, amparados bajo un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos dimana sino que, además, la inviabilidad de constatar la extinción, por el transcurso del tiempo, del probable ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada de ellos.*

*Séptimo: Que, además, la acción civil aquí deducida por los demandantes en contra del Fisco, tendientes a conseguir la reparación íntegra de los detrimentos ocasionados, encuentra su fundamento en los dogmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5º, inciso segundo, y 6º de la Constitución Política de la República.*



*Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos preceptúan que la responsabilidad del Estado por esta clase de sucesos queda sujeta a disposiciones de Derecho Internacional, que no pueden quedar incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, por cuanto, de ventilarse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la transgresión de una regla internacional, con el subsecuente deber de reparación y de hacer cesar los colofones del agravio.*

*Octavo: Que, estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.*

*Por esta razón (...), no resultan aplicables a estos efectos las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el recurso, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.*

*Noveno: Que, por último, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva también de los artículos 6 inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, de aceptarse la tesis del recurso, quedarían inaplicadas” .*

*A su vez, la Iltna Corte de Apelaciones de Talca ha señalado que “en lo que liga con la prescripción extintiva de las acciones civiles de indemnización argumentada por el recurrente, y si bien es cierto y conocido que nuestro ordenamiento jurídico establece plazos de prescripción en materia civil, estos sentenciadores no pueden desatender la naturaleza del*



*proceso en el cual se enmarca la presente acción, cual es, sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile en contra de los demandantes.*

*En tal sentido, no huelga subrayar que es el propio abogado que alegó en estrados por la parte demandada y recurrente quien en su defensa fija más de una fecha para contar el plazo de la prescripción, señalando el 11 de marzo de 1990 (fecha del retorno a la democracia) y el 14 de marzo de 1991 (fecha en que se conoció el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, más conocido como Informe Rettig), en circunstancias que los hechos ocurrieron en el mes de febrero de 1974, validando mediante su propio argumento la situación extraordinaria que afectaba a los demandantes en su oportunidad para presentar la acción civil, lo que lógicamente debe tenerse en consideración al momento de decidir aplicar las normas de prescripción contenidas en nuestro Código Civil.*

*Por otro lado, y siendo un factor relevante en la decisión de este punto, como bien se sabe nuestra Carta Fundamental por vía del inciso 2° del artículo 5 nos vincula directamente con todo aquel Tratado, Pacto o Convenio suscrito y ratificado por el*

*Estado de Chile, todos los cuales tienen una categoría superior y constitucional cuando se trata de derechos humanos, dentro del cual, desde luego, se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en cuyo artículo 63 inciso 1° se dispone que cuando se han violado los derechos reconocidos en dicha Convención, como sucede en la especie, se debe, entre otras medidas, pagar una justa indemnización.*

*Con todo, aun cuando la norma anterior no existiera o no resultase aplicable en nuestro derecho, no puede ni debe olvidarse que siempre cuando se trate de un tema de derechos fundamentales, aun en sede*



*patrimonial, la interpretación de las normas debe ser conforme al principio favor persona o pro homine; sin desatender lo prescrito por el artículo 27 de la Convención de Viena - vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980 - que establece que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado, razones todas que confirman la inaplicabilidad de la prescripción alegada por el recurrente (en el mismo sentido, fallos Roles Núm. 9.757-2015, 20.580-2016 y 83.348-2016, de la Excma. Corte Suprema)” .*

9º) Que, finalmente, no puede olvidarse que se trata un derecho fundamental el acceder a una reparación integral; así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde si bien es cierto, la mayoría de los procesos que llegan ante ella es por crímenes o temas penales, el acceso efectivo a la justicia debe evaluarse integralmente, comprendiendo en ello, también si hubo acceso en materia civil a las reparaciones. Y la sentencia del caso del “*Penal Miguel Castro Castro con Perú*”, señala que el impedimento del derecho de acceso a la justicia de las víctimas o sus familiares se extiende incluso en el plano de las compensaciones económicas por los daños causados con el ilícito penal y ello acontece desde que el Estado omite “...*llevar a cabo investigaciones y procedimientos internos suficientemente rigurosos para contrarrestar el encubrimiento realizado...*”. Lo cual constituye una justificación y explicación clara de porque no es admisible en este tipo de crímenes la institución de la prescripción, puesto que se debe reparar en todos los ámbitos (porque siempre es el Estado el sujeto pasivo) a las víctimas y sus familias, y la prescripción, atendida la naturaleza de estos crímenes, atenta contra esta reparación integral. Por ello es que existe una convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y si bien Chile no



la ha ratificado formalmente, sus normas y principios (que son coherentes con la dignidad de la persona, la progresividad de los derechos fundamentales y la eficacia de su protección) se incorporan materialmente mediante el artículo 5 inciso 2° de la Carta Fundamental que le pone como límite al legislador, “*el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana*”, por lo que existe norma material sustantiva sobre el tema.

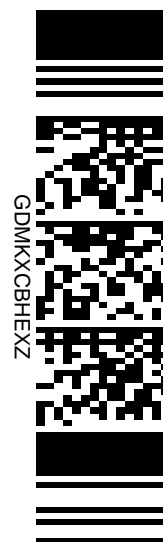
Lo anterior ha sido reiterado por la Excma. Corte Suprema el pasado 22 de agosto, cuando, en el ingreso Rol N° 138.662, párrafo final del motivo quinto, señala que “*De este modo, en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios en las que los jueces del fondo asilan su decisión, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional que ha debido ser reconocido por los jueces de la instancia al resolver la demanda intentada (SCS Rol N° 8318-18 de 26 de septiembre de 2019, Rol N°29944-18 de 26 de marzo de 2019 y Rol N° 29617-19 de 2 de marzo de 2020)*”.

## II.- Defensa de inexistencia de responsabilidad objetiva.

10º) Que respecto de ésta defensa, ella se torna irrelevante, toda vez que más allá de la discusión doctrinaria, se acreditó que en la causa rol N° 2.182-98 “A”, Caratulada “Caravana de la Muerte, episodio Curicó, instruida por la Ministra de Fuero, doña Patricia González Quiroz, se



acreditó “...que el 11 de septiembre de 1973 fueron detenidos dos integrantes del equipo de seguridad del entonces Presidente Salvador Allende, conocido como Grupo de Amigos Personales del Presidente, GAP, ambos militantes del Partido Socialista, cuyos nombres eran Wagner Herid Salinas Muñoz y Francisco Urcisinio Lara Ruiz, situación que ocurrió en el puente sobre el río Huayquillo, en la ciudad de Curicó. Posteriormente fueron conducidos hasta el Regimiento de Curicó y luego derivados a la cárcel de la ciudad. El 30 de septiembre de 1973 y por orden del jefe de una comitiva de militares que provenían de Santiago, de paso por Curicó, Wagner Herid Salinas Muñoz y Francisco Urcisinio Lara Ruiz, fueron trasladados hasta el Regimiento de Artillería Motorizada, Tacna, cuyo Comandante era Luis Joaquín Ramírez Pineda, en Santiago, lugar donde permanecieron privados de libertad hasta el 5 de octubre de 1973. Ese día, y en cumplimiento de una orden superior del Comandante del Regimiento, oficiales de dicho Regimiento, durante un patrullaje nocturno, de control del toque de queda, transportaron a los detenidos mencionados, Salinas Muñoz y Lara Ruiz, a un sitio en la comuna de San Bernardo y luego se procedió a ejecutarlos, haciendo uso de armas de fuego, para luego trasladar sus restos hasta el Servicio Médico Legal ubicado en Avenida La Paz N°1012, comuna de Independencia, donde fueron recibidos bajo los protocolos números 3160 y 3161, respectivamente, se practicó la autopsia de sus cuerpos, constatándose que habían fallecido como consecuencia de las heridas de bala recibidas, causa de muerte que quedó registrada en sus respectivos certificados de defunción”. Dichos hechos no fueron alterados por la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 2 de noviembre de 2016, ni tampoco fueron alterados por la Sentencia de reemplazo de la Excma. Corte Suprema de 3 de julio de 2017, causa rol 95.096-16.



La referida sentencia, determina la forma en que ocurrió la muerte de Francisco Urcisinio Lara Ruiz, y la responsabilidad de los funcionarios públicos (Ejército de Chile), quienes, en el ejercicio de sus funciones, con medios proporcionados por el Estado de Chile y dirigidos y amparados por su superioridad, dieron muerte a Lara Ruiz, por lo que, más allá de la responsabilidad objetiva, que en este caso existe en virtud del artículo 42 de la Ley 18575, ley que no estaba vigente a la época de comisión del crimen, pero si al momento de la presente, pero al ser norma de Derecho Público, y haber tenido el Estado la posibilidad de reparar integralmente los perjuicios ocasionados, al menos desde la publicación del informe Rettig, la objetiviza, bastando con acreditar la autoría de los crímenes por parte de agentes del Estado, como lo hicieron las sentencias aludidas, para hacer exigibles dichas responsabilidades, toda vez que: Se acreditó el ilícito; se demostró que fue cometido por agentes del Estado de Chile; fue cometido con medios del Estado de Chile; la superioridad no sólo tuvo conocimiento, sino que tuvo el consentimiento para tales hechos; y no consta que haya existido control efectivo sobre dichas actuaciones, toda vez que las autoridades de la época, negaron, en general, cualquier violación a los derechos humanos.

11º) Que lo anterior, ha quedado refrendado en el fallo de 29 de agosto de 2022 de la Excma. Corte Suprema, que reseña en su motivo sexto; *“Que, como ha señalado reiteradamente esta Corte, este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.*



*Por ello, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, ya que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce al momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente. (Cfr. Aguiar, Asdrúbal. La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 17, IIDH, 1993. Pag. 25). En efecto, se trata de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado.*

*La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto”.*

### III.- No existen daños que indemnizar.

12º) Que en primer término, alega la demandada que el demandante ya fue indemnizado, señalando que la Ley 19.123 estableció un bono compensatorio, una pensión mensual de reparación y otros beneficios, todos los cuales son incompatibles con cualquier otra indemnización.

Sin embargo, yerra profundamente la defensa en su argumentación, toda vez que se remite concretamente a la aludida ley y sus disposiciones, pero la presente acción es una acción ordinarias por responsabilidad extracontractual, que nada tiene que ver, ni con la mencionada ley ni con las asignaciones de derechos sobre prestaciones estatales específicas (como la Ley 19.992 sobre prisioneros y torturados; o la Ley 19.234 sobre prestaciones médicas gratuitas, programa PRAIS) y las reparaciones simbólicas.

Así, la anterior defensa, no cabe sino rechazarla de plano, primero porque olvida la demandada que las leyes son de aplicación y efectos





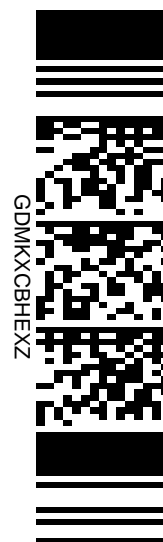
generales y las sentencias de los procesos judiciales son de aplicación y efectos particulares. Pareciera que ésto es obvio, pero como fue alegado, debemos entender que para la demandada no lo es y entonces hay que entrar a explicar: Todos los supuestos pagos que ha señalado la demandada que le hizo al demandante, no son tales, sino meros efectos de la aplicación de la ley, es decir, se trata de prestaciones de origen legal, a las cuales tienen derecho todos aquellos que cumplan con ciertos y determinados requisitos, y en este caso concreto se está demandando una indemnización de perjuicios por un hecho concreto y puntual. En segundo lugar, dichas reparaciones y pagos no constituyen una sustitución de la indemnización solicitada por el actor, puesto que ellas tienen por objeto extinguir una obligación concreta, y la obligación concreta que se hace en este proceso, lo es en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado de Chile, principalmente en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, sólo cumplir con el deber jurídico internacional contraído por el Estado de Chile, por lo tanto si éste pretende alegar que por el hecho de cumplir con las leyes que el mismo ha dictado está indemnizando moralmente al demandante de autos, está un grueso e injustificado error (o ignorancia), puesto que dicha satisfacción no es ni corresponde a este caso concreto, sino que simplemente corresponde a sus compromisos como tal ante la comunidad internacional y con los Tratados, Pactos y Convenios que voluntariamente firmó y ratificó; por lo tanto ni en la forma ni en la causa de cumplir, la supuesta satisfacción reparatoria que alega no puede ser considerado como tal, y aún si alguien así lo estimara, tampoco se puede señalar que ha sido en favor de la demandante de autos.

Además, en esas leyes no hay transferencia de dinero que tenga por causa específica, concreta y directa, la comisión del ilícito criminal que se invoca en el presente proceso; tampoco pueden considerarse que los hechos



que motivan la petición de indemnización en esta causa hayan sido las exclusivas responsables de las reparaciones específicas de la Ley 19.992, la cual claramente establece criterios generales para dichas reparaciones específicas ni las simbólicas, las cuales no son incompatibles con la acción personal de autos; ni mucho menos se puede invocar la asignaciones de derechos prestacionales estatales específicos o concretos, pues ellos proceden por ley, y como toda ley, tienen aplicación general y no de caso concreto. Como ha señalado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca *“todas y cada una de las reparaciones que cita aludiendo a las Leyes Núm. 19.123, 19.980, 19.213, 19.992 y 20.405, no son sino meros efectos - de alcance general por lo demás - del cumplimiento por el Estado de Chile de las obligaciones internacionales que han asumido mediante la suscripción de los distintos Tratados, Pactos y Convenios sobre Derechos Fundamentales, incorporados a nuestro ordenamiento jurídico mediante el artículo 5 inciso 2º de la Constitución Política de la República (...). A mayor abundamiento, se hace necesario recordar que el pago - como modo de extinguir las obligaciones - lo hace respecto de una obligación concreta, lo que en el caso sub lite no se da, puesto que las reparaciones a las que alude el recurrente no cumplen sino un rol de reparación objetiva del Estado de Chile ante su pueblo, naturaleza completamente distinta de la reparación subjetiva solicitada en el caso concreto y por víctimas determinadas (en tal sentido sentencias definitivas pronunciadas en los recursos Roles Núm. 3.319-2015, 2.592-2015 y 3647-2016 de esta misma Corte)”*.

En definitiva, aquí no hay pagos realizados, sino que se trata de la reparación objetiva del Estado de Chile ante su pueblo, y en autos se demanda la reparación subjetiva frente al caso concreto y para una víctima determinada, por lo mismo no existe identidad de causa entre lo pedido en esta y lo otorgado en esas leyes, por la naturaleza misma de ellas; unas por



ley en cumplimiento de una obligación internacional y la presente por sentencia judicial que determinó las responsabilidades criminales de los agentes del Estado que permiten la acción de autos; por lo que se rechaza la defensa sobre pagos promovida.

IV.- En cuanto al fondo.

13º) Que habiéndose rechazado las excepciones, deberá entrarse al fondo, de la acción, así la demandante acreditó la existencia del hecho doloso de ejecución política u homicidio, calificado como crimen de lesa humanidad cometido en la persona de Francisco Urcisinio Lara Ruiz, cometido el 5 de octubre de 1973 por agentes del Estado de Chile, específicamente del ejército de Chile; así lo decretan los fallos judiciales acompañados, la Copia simple de hoja N° 193 correspondiente al Tomo III del Informe Rettig, y lo reseñado por los testigos de la causa.

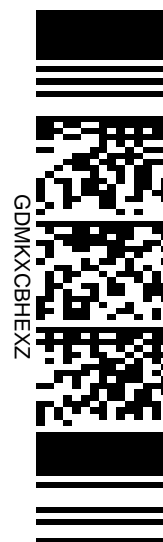
Del mismo modo, se acreditó el grado de parentesco y la vinculación del actor de autos; por medio de certificados acompañados y los dichos de los testigos, quienes dan cuenta del daño causado a la familia de la víctima, entre los cuales está el demandante de autos.

Finalmente, se constata la existencia de daño psicológico o moral en el actor, algo que se devela no sólo del natural y lógico entendimiento del asesinato de su hermano, en las condiciones que ocurrió y en la forma en que se desarrollaron los hechos, algo que de por sí puede ser inferido, sino que también dan cuenta de ello los testigos Archibaldo Antonio Villalobos Gaete, quien expresa puntualmente, entre otras frases; “...*la familia sufrió un daño terrible uno de los hermanos tuvo que autoexiliarse en España, porque sufría un persecución terrible, bueno eso nos pasó a la mayoría de los chilenos, mi vecino a quien conozco aproximadamente 40 años cambio radicalmente su forma de ser, era un hombre extrovertido hoy en día es casi autista, estoy exagerando pero cambio notablemente su forma de ser,*



*incluso su relación con sus parientes...”; “...la misma situación laboral le trunco su carrera, no se contrata ni se remunera con mucho gusto al pariente de un extremista, un delincuente”. Repreguntado el testigo para que diga si le provoco alguna secuela emocional o psicológica al demandante, éste respondió que “...Sí como le había expresado anteriormente cambio de conducta en forma radical se abstraigo del mundo en sí mismo, es un auto encarcelamiento muy terrible, del que es muy difícil salir...”; además relata que “...El hijo mayor se llama Francisco y le puso ese nombre en memoria y homenaje de su hermano”.*

Por su parte, la testigo María Elena Villalobos Guzmán indica que se le causó al demandante un “...que gran daño emocional, enorme, se hizo un hombre introvertido, callado, inseguro, temeroso, a grandes rasgos lo que he visto...” lo cual fue causado por “...la muerte de su hermano, el asesinato de su hermano”; con quien tenía una cercana, pues “...De sus 8 hermanos era el hermano más querido era como su partner”. Además fue perseguido, “...irrumpían en su casa los militares buscando armamento, fue un desastre”. Agrega que conoce al demandante “...Alrededor de 40 años y esto (su daño emocional) es comentado en el barrio, sobre todo en el tiempo de Dictadura, esto se conversaba igual...”, indicando que había daño emocional para “...toda la familia con temores, hasta hoy no es una familia que no vive tranquilo, ahora la muerte del hijo de don Francisco, quien murió en la calle ya que nunca aceptó lo ocurrido con su padre...”, explicando que ese hijo del demandante fallecido “...Se llama Francisco, justamente por su tío”. Agrega que además la muerte de su hermano le significó consecuencias laborales para él, “...no volvió a ser el mismo, los seguían a toda la familia, donde fueran, fue discriminado laboralmente, estar cerca de gente así era temer que a uno le pudiera pasar lo mismo...”.



De esta forma, con los antecedentes allegados, los dichos de los testigos que deponen en autos, quienes están contestes en el fondo y en la forma, dando razón de sus dichos y, además, considerando la naturaleza del delito que motiva el perjuicio, deberá tenerse por establecido la existencia de los perjuicios, y en consecuencia, deberá acogerse a la demanda.

14º) Que, respecto del monto por el cual se acogerá la demanda, si bien es claro que no puede valorarse objetivamente en dinero el precio de una vida ni tampoco puede cuantificarse el dolor causado, pero teniendo presente los montos que se fijan en causas de esta naturaleza y sobretodo porque ni la condición social ni la popularidad de la persona de la víctima o su familia no debe influir al momento de fijar la indemnización, considerando también la angustia, desesperación, y toda la aflicción, que puede, incluso traducirse por factores psicosomáticos, en dolores físicos, y las consecuencias que seguramente pueden perduran por toda la vida, lo que si bien no se puede acreditar que así sea, es dable o posible que así ocurra, atendida las máximas de la experiencia en esta materia, como asimismo por sentido común, lo que no puede estar ausente al ponderar el daño moral; por ello, hay un daño moral incuestionable bajo todas las consideraciones y motivaciones que pueda estimar la doctrina, todo lo cual lleva a este tribunal a estimar que debe acogerse la demanda en un monto de \$150.000.000.-,

15º) Que se deja constancia que los demás medios de prueba allegados a la causa, en especial en segunda instancia, en nada alteran lo concluido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 145 y 187 del Código de Procedimiento Civil, **SE REVOCA la sentencia apelada de tres de junio de dos mil veinte**, y su complemento de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, y **en su lugar se declara:**



**I.- Que se rechazan todas las excepciones y defensa opuestas**, de conformidad con lo expresado en el motivo 1º), 2º), 3º), 4º), 5º), 6º), 7º), 8º), 9º), 10º), 11º) y 12º);

**II.- Que HA LUGAR a la demanda de lo principal de folio 1**, de conformidad con lo expresado en los motivos 13º), 14º) y 15º); y en consecuencia:

**1.- Se condena al Fisco de Chile, ya individualizado, a un reconocimiento público de que Francisco Urcisinio Lara Ruiz fue víctima de un delito lesa humanidad**, restituyéndose en plenitud su honra y dignidad, condenándose a la demandada a pagar una inserción de prensa en un diario de la ciudad de Talca en que se haga público lo sustancial de lo sentenciado por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa Rol N° 95.096-2016. Dicha publicación deberá ser un día domingo en cualquier periódico impreso de circulación regional, o bien en un medio digital.

**2.- Se condena al Fisco de Chile a pagar una indemnización de perjuicios por daño moral, en beneficio de la demandante, don LUIS ARTURO LARA RUIZ, ya individualizado, por la suma de \$150.000.000.-**, con los intereses y reajustes desde que la presente cause ejecutoria, por tratarse de sentencia constitutiva de derechos;

**3.- No se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida.**

Redactó el Ministro don Gerardo Bernales Rojas.

Regístrese y devuélvase.

**Rol Ingreso Corte 1176-2020 Civil (acumulada 2097-2022).**

Se deja constancia que no firma la Ministra doña Blanca Rojas Arancibia, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado.





GDMKXOBHEXZ

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca integrada por Ministro Presidente Gerardo Favio Bernalles R. y Ministra Suplente Marisol Macarena Ponce T. Talca, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.

En Talca, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.